

Santiago, dieciocho de enero de dos mil veintitrés

**Visto:**

Se reproduce la sentencia en alzada de fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dictada por el juez subrogante del 20° Juzgado Civil de Santiago, don Mauricio Vergara Vargas, y se sustituye en su considerando Décimo Sexto el guarismo “100.000.000” y su referencia en letras “cien”, por “75.000.000” y “setenta y cinco”, respectivamente.

**Y se tiene, además, y en su lugar presente:**

**PRIMERO:** Que por sentencia de 25 de marzo de 2022, en causa Rol C-6101-2019, del 20° Juzgado Civil de Santiago, se resolvió lo siguiente:

I.- Que se **RECHAZA** la excepción de reparación satisfactiva o pago al actor.

II.- Que se **RECHAZA** la excepción principal de prescripción de la acción civil de 4 años en virtud de lo dispuesto por el artículo 2332 del Código Civil.

III.- Que se **RECHAZA** la excepción subsidiaria de prescripción de la acción civil de 5 años en virtud de lo dispuesto en el artículo 2515 en relación con el artículo 2514 del Código Civil.

IV.- Que se **RECHAZA** la alegación subsidiaria de regulación que el daño moral debe considerar los beneficios consistentes en la reparación integral y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

V.- Que se **ACOGUE** la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral interpuesta a fojas 1, en contra del demandado Fisco de Chile, y se **CONDENA** a éste a pagar en favor del demandante don Gustavo Muñoz López la suma de \$100.000.000 (cien millones de



pesos); y se **RECHAZAN** los montos solicitados por concepto de daño emergente y lucro cesante.

**VI.-** Que la suma indicada, se pagará reajustada de acuerdo a la variación del IPC desde la fecha en que quede firme esta sentencia y el pago efectivo de la indemnización y devengará intereses legales desde que el Fisco incurra en mora y hasta el pago efectivo de la indemnización.

**VII.-** Que se **ACOGE** la alegación de improcedencia de pago de reajustes e intereses en la forma solicitada.

**VIII.-** Que **NO SE CONDENA** en costas a la demandada, por no haber sido totalmente vencida.

**SEGUNDO:** Que se han traído los autos en relación para conocer del recurso de apelación deducido por el Fisco de Chile en contra de la sentencia dictada por el 20° Juzgado Civil de Santiago, solicitando que se acoja y enmiende con arreglo a derecho el referido fallo por las razones que expresa, revocándolo y declarando que, sin perjuicio de las peticiones subsidiarias, se rechace la demanda civil de indemnización de perjuicios en todas sus partes o, en subsidio, se rebaje sustancialmente el monto al que fue condenado en primera instancia.

**TERCERO:** Que de los antecedentes del proceso que interesan al recurso en análisis y que no fueron controvertidos, son los siguientes:

- a) La calidad de víctima de detención ilegal, exilio y tortura de don Gustavo Muñoz López.
- b) Que en la calidad antes señalada, aparece en el Informe emitido por la Comisión Valech I, conforme al Decreto Supremo N° 1040/2003.

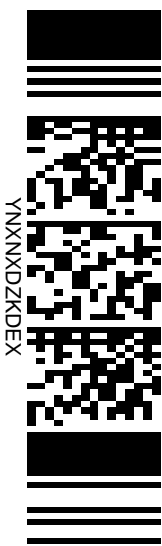
Por ende, se debe tener presente que no ha sido discutida por las partes la responsabilidad del Estado por graves violaciones a los derechos humanos. En consecuencia, se tiene como acreditado que



don Gustavo Muñoz López fue detenido ilegalmente y torturado, todo lo cual ocurrió en un contexto de violencia propia de aquella época, la que era practicada por agentes del Estado o civiles, que actuaban por órdenes o bajo el amparo del régimen imperante, mediante prácticas graves y sistemáticas de violaciones a los derechos humanos con el único objetivo de exterminar y amedrentar -ya sea física y/o psicológicamente- a personas opositoras al régimen militar, como en el caso de autos.

**CUARTO:** Que, para resolver lo propuesto por la vía del recurso de apelación deducido por el Fisco de Chile, esta Corte estima necesario hacer presente que con la aprobación por parte del Estado de Chile del Pacto de San José de Costa Rica el 23 de agosto de 1990, mediante Decreto Supremo N°873, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 5 de enero de 1991, nuestro país se ha integrado al denominado “Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”, lo que significa que este sistema está conformado por un conjunto de normas y principios sobre los derechos esenciales de las personas. A través de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, los Estados Partes se someten a un ordenamiento jurídico internacional superior, asumiendo la obligación de proteger los derechos humanos, no en relación con otros Estados, sino en relación a los individuos que se encuentran bajo su jurisdicción. En consecuencia, los órganos jurisdiccionales chilenos forman parte integrante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y tienen la obligación de aplicar sus normas.

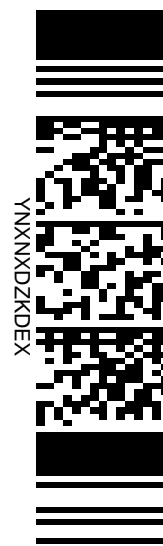
Así también, es necesario tener en consideración la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969, norma internacional que también es norma nacional, al haber sido ratificada



dicha Convención por Chile, incorporándose a nuestro derecho interno por Decreto Supremo N°381, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 22 de junio de 1980. La citada Convención, que es parte de nuestro derecho interno, dispone en el artículo 26: *“Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”*. Y el artículo 27, establece lo siguiente: *“El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”*.

Que en relación a la Convención Americana de Derechos Humanos, a la que el Estado de Chile se encuentra obligado a respetar, dispone en el artículo 63.1: *“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”*, disposición que debe interpretarse acorde a la reiterada jurisprudencia que se ha dictado, no sólo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que constituye el órgano autorizado para determinar su sentido y alcance, sino que también por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia.

A propósito de la obligación que tienen las autoridades estatales, específicamente el Poder Judicial, de observar los tratados que han sido ratificados por el Estado, se debe en cuenta, además, la jurisprudencia y doctrina emanadas de la Corte IDH, como intérprete último de la Convención Americana o Pacto de San José, al señalar en el caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, sentencia de 16 de septiembre



de 2006, párrafo: “124. La Corte es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sujetos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe hacer una especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que se aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

**QUINTO:** Que en cuanto al agravio que dice haber sufrido la recurrente con la sentencia impugnada, argumentando que es improcedente la indemnización por haber sido ya resarcido el demandante a través de leyes de reparación, la sentencia recurrida se pronuncia sobre la obligación que pesa sobre el Estado de reparar integralmente los daños causados a la víctima, dando fundamentos de peso en el considerando Undécimo, señalando que la Ley N°19.123 “en parte alguna estableció incompatibilidad entre los beneficios que otorga e indemnizaciones de perjuicios establecidas en sede judicial, no existiendo motivo alguno ni siendo facultad de esta sentenciadora para presumir que dicho estatuto se dictó con el ánimo de indemnizar todo daño moral sufrido por las víctimas de derechos humanos”. En consecuencia, los beneficios establecidos en la Ley N°19.123 y Ley



N°19.992, no resultan incompatibles con la reparación del daño moral, por lo que no se acogerá esta alegación.

**SEXTO:** Que con respecto a la alegación que hace la demandada, aduciendo que el fallo del tribunal *a quo* ha rechazado erradamente la excepción de prescripción extintiva de la acción interpuesta por el actor, manifestando que el sentenciador debió desestimar la demanda civil interpuesta en autos, por cuanto la acción indemnizatoria ejercida no estaba vigente a la época de su notificación al Fisco, al haberse extinguido por prescripción. Agrega la demandada que al contestar la demanda opuso la excepción de prescripción extintiva de 4 años conforme al artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código y, subsidiariamente, invocó la prescripción ordinaria de 5 años, con arreglo al artículo 2515 de dicho *corpus* legal. Asimismo, añade el apelante que no existe norma expresa de derecho internacional de los derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y que no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil.

El juez de primera instancia da como fundamento para rechazar la excepción de prescripción, que la acción civil presentada deriva de hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad, los que no prescriben, resultando incoherente entender que la acción indemnizatoria sí prescriba, siendo contrario a los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Hace presente el fallo apelado, “*que no estamos frente a una acción de indemnización de perjuicios común, que derive de relaciones privadas contractuales o extracontractuales propias del derecho interno,*



*sino que nos encontramos ante una acción que se sustenta en situaciones de carácter humanitaria y que por lo tanto debe sujetarse a normas y principios y las reglas internacionales que conforman el ius cogens, propias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.*

Por otra parte, cabe señalar que el Estado de Chile ha hecho un reconocimiento expreso en relación a la imprescriptibilidad de las acciones civiles por graves violaciones a los derechos humanos y que las víctimas pueden obtener una reparación integral por los daños causados por el Estado. Es así, como en el caso “Órdenes Guerra y otros vs. Chile”, en sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 29 de noviembre de 2018, el párrafo 19 transcribe lo señalado por el Estado en su contestación, quien manifestó que, *“al no existir controversia sobre el objeto principal de este litigio internacional, lo que procede es reestablecer los derechos que se han tenido por vulnerados y determinar el pago de la indemnización a la parte lesionada”*. Así, *“previo a la declaración de medidas de reparación que adopte [esta] Corte, es importante para el Estado formular los siguientes alcances: En primer lugar, las causas judiciales a que se ha hecho referencia a nivel interno han sido tramitadas completamente y las decisiones pronunciadas cuentan con el carácter de cosa juzgada, lo que hace imposible jurídicamente restituir los procesos judiciales para dictar nuevas sentencias. No obstante, **el Estado comparte que las reclamaciones de reparación por violaciones flagrantes de los derechos humanos no se encuentran sujetas a prescripción; éste es un principio que tiene asidero en la costumbre internacional, anterior a los tratados internacionales de derechos humanos, por lo que el transcurso del tiempo no puede ser impedimento para que las víctimas y sus familiares obtengan una reparación integral por los daños causados. En segundo lugar, en cuanto a la naturaleza de***



*las medidas de reparación a ser adoptadas por [la] Corte, tornando en cuenta su competencia amplia contenida en el artículo 63.1 de la CADH, el Estado es de la opinión que, dado que la presente causa se origina por la imposibilidad de que un tribunal interno conociera el fondo de una acción cuya naturaleza es indemnizatoria de perjuicios, la reparación adecuada tendiente a hacer desaparecer los efectos de la violación cometida correspondería principalmente en la determinación de una indemnización monetaria”.*(Lo destacada en negrilla es nuestro).

Que por los fundamentos invocados en el considerando Décimo de la sentencia que se impugna y por las razones dadas en los párrafos anteriores, esta Corte deberá desestimar las alegaciones sobre la procedencia de la prescripción de la acción civil en las acciones civiles por indemnización de perjuicios por daño moral, derivadas por graves violaciones a los derechos humanos.

**SÉPTIMO:** Que en lo que respecta a la alegación de la recurrente que el monto de la indemnización por daño moral resulta excesivo, en consideración a los montos fijados por la jurisprudencia, y teniendo además, en consideración que el demandante ha recibido y continúa recibiendo montos de reparación por parte del Estado de Chile, solicitando en subsidio de las alegaciones precedentes, y en el evento que se decida confirmar la sentencia de primer grado, que se rebaje sustancialmente la suma otorgada, esta Corte hace presente lo siguiente: a) Que como señaló el tribunal de primera instancia en el considerando Décimo Quinto de la sentencia recurrida, en cuanto a los montos fijados por la jurisprudencia, *“que rige para todos los tribunales del país el principio de independencia, que el hecho de citar jurisprudencia en un fallo tiene por objeto simplemente reforzar los fundamentos que se plantean en cada sentencia individualmente...”*, b) Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 3°, inciso 2° del Código





*Civil “Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren”.*

Sin perjuicio de lo razonado, esta Corte estima que el monto que prudencialmente debe fijarse, por este concepto, es la suma de \$75.000.000 (setenta y cinco millones de pesos), con los reajustes fijados en el motivo Décimo noveno del fallo que se revisa.

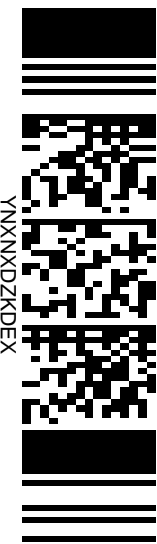
Por estas consideraciones, citas legales y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

Que **se confirma** la sentencia apelada fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dictada por el juez subrogante del 20° Juzgado Civil de Santiago, **con declaración** que se reduce la indemnización por daño moral a la suma de \$75.000.000 (setenta y cinco millones de pesos), con los reajustes fijados en el considerando Décimo noveno de dicha sentencia; sin costas, al estimar que la demandada tuvo motivos plausibles para litigar.

Se **previene** que el ministro interino Matías de la Noi estuvo por fijar el monto de la indemnización en la suma de \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos) por estimar, prudencialmente, que esta cantidad se ajusta de mejor manera a la naturaleza y entidad de los hechos y del daño sufrido por el demandante.

Redacción del abogado integrante Claudio Gonzalo García Lamas.

No firma el Ministro (i) señor de la Noi, no obstante concurrir a la vista de la causa y del acuerdo, por haber cesado funciones en esta Corte.



No firma la Ministro (s) señora Orellana, no obstante concurrir a la vista de la causa y del acuerdo, por haber cesado funciones en esta Corte.

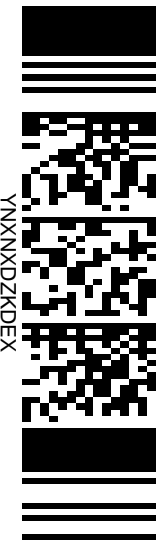
**Regístrese y comuníquese.**

**RoI IC Civil N° 6871-2022**



Proveído por el Señor Presidente de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a dieciocho de enero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 11 de Septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.